



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTES	MARYLIN VELÁSQUEZ MONÁ, LORYN YURLEY OCAMPO VELÁSQUEZ y LIZ YUMARY OCAMPO VELASQUÉZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES, COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA o sus herederos determinados o indeterminados y DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ
ORIGEN	Juzgado Trece Laboral del circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 013 2021 00362 01
ASUNTO	Deniega solicitud de adición de sentencia

En el proceso de doble instancia referenciado, procede la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín a resolver solicitud de aclaración, adición y/o corrección¹ de la providencia emitida el 21 de noviembre de 2021² que resolvió el recurso de apelación contra el auto proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, en que rechazó la demanda, para en su lugar revocar o modificar la misma, en los siguientes 4 aspectos:

1) Respecto de la página 2. Tercero y cuarto párrafo, y página 3. Primero y segundo párrafo:

En torno a estos puntos señaló la memorialista debe adicionarse, aclararse y/o corregirse lo decidido en la segunda instancia, “en las partes que hace relación al contenido del memorial de la demandante para cumplir las exigencias del auto de devolución de la demanda, específicamente, en las partes en que se indica: “ii) en el acápite de hechos 5 y 6 se utilizó la disyuntiva y copulativa “y/o”, para, dependiendo del resultado de las pruebas hacer explícita la afirmación de afiliación del señor Ocampo Valencia al SGSSP referidas en el hecho 4 de la demanda y al momento de la muerte, en una o en varias de las AFP relacionadas”, “La vinculación de ambos demandados, es con el fin de que prueben el cumplimiento de la obligación de la afiliación del señor Ocampo Valencia al SGSSP en una o varias de las AFPs demandadas, y en caso que no lo hayan realizado, les sean aplicables las normas que

¹⁵Carpeta “02SegundaInstancia”, 05SolicitudCorreccionAdicion.pdf

¹⁵Carpeta “02SegundaInstancia”, 04AutoDeDecision.pdf

obligan a las administradoras de pensiones al recaudo de aportes y/o mora en su pago, y que hacen inoponibles a los beneficiarios su no pago; o de no probar tal afiliación, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes esté a cargo de la señora Toro de Acosta o sus herederos determinados e indeterminados y el señor Uribe Velásquez de manera solidaria, o de la señora Toro de Acosta o sus herederos determinados e indeterminados y/o el señor Uribe Velásquez.” y “(...) con miras a obtener información sobre la afiliación del causante a cualquiera de estas AFPS, o de cualquiera que existiera para la fecha en que se produjo la muerte y que ya no existen, cuyas obligaciones quedaron a cargo de las AFPs citadas. Se hizo uso de la copulativa y disyuntiva “y/o” para, dependiendo del resultado de las pruebas, hacer explícita la afirmación de la afiliación del señor Ocampo Valencia al SGSSP, en una o varias administradoras de pensiones demandadas (...).”

Ello, porque lo realmente expresado por la demandante fue lo siguiente:

“(...) en el acápite de los hechos, en los número 5 y 6, se utilizara la copulativa y disyuntiva “y/o” para, dependiendo del resultado de las pruebas, hacer explícita la afirmación de afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en las fechas expresadas en el hecho 4 de la demanda y al momento de la muerte, en una o en varias de las AFP que se relacionan en los hechos 5 y 6 de la demanda (...), “(...) las razones por las cuales se vincula como demandada en este proceso a AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA identificada con C.C # 25.118.355 O A SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS son que ella o sus herederos pruebe (n) el cumplimiento de la obligación de afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO NATALIA RESTREPO FERNÁNDEZ ABOGADA TITULADA-NIT # 43.267.153-1 2/6 CARRERA 52 #50-25 EDIFICIO SURAMERICANO OFICINA 716 TEL: 5121146 CEL: 3012417201 E MAIL: nataliarf7@gmail.com-natyrpof@yahoo.es MEDELLÍN-ANT-COLVALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en una o varias de las AFP indicadas en los hechos 5 y 6 de la demanda y se produzcan los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y los efectos solicitados en las pretensiones principales 1, 2 y 3 y ss o subsidiarias 1, 2 y 3 y ss de la demanda; que las razones por las cuales se vincula como demandado en este proceso a DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258 es que él pruebe el cumplimiento de la obligación de afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en una o varias de las AFP indicadas en los hechos 5 y 6 de la demanda y se produzcan los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y los efectos solicitados en las

pretensiones principales 1, 2 y 3 y ss o subsidiarias 1, 2 y 3 y ss de la demanda. También son razones para vincular como demandados en este proceso a AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA identificada con C.C # 25.118.355 O A SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS y a DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258, que, en el evento de que ellos no prueben (n) el cumplimiento de la obligación de afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en cualquiera de las AFP indicadas en los hechos 5 y 6 de la demanda, se produzcan los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y los efectos solicitados en las pretensiones principales 1, 2 y 3 y ss o subsidiarias 1, 2 y 3 y ss de la demanda y sea la AFP pública, en este caso, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, la que en cumplimiento los compromisos del Estado Colombiano establecidos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, la obligada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que se solicita; o para que, según sea el caso, los obligados al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que se solicita sean AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA identificada con C.C # 25.118.355 O SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS y DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258 de manera solidaria (pretensiones subsidiarias 6, 7, 8 y ss y 18, 19 y 20 y ss de la demandada); o AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA identificada con C.C # 25.118.355 O SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS y/o DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258 (pretensiones subsidiarias 21, 22 y 23 y ss y 33, 34 y 35 de la demanda).” y “que pretenden obtener la documentación e información sobre la afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en cualquiera de estas administradoras de fondos de pensiones o en las que existían para las fechas en que se desarrollaron los contratos de trabajo y en la fecha en que se produjo su muerte y que actualmente no existen, pero cuyas obligaciones quedaron a cargo de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., o de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS”.

Refiere además la mandataria judicial, que lo anterior resulta relevante dada la complejidad del caso, y que se requiere de la mayor claridad posible, siendo de vital importancia aludir expresamente a las fechas de los contratos de trabajo, a las fechas de la afiliación al SGSSI a la fecha de la muerte del señor Ocampo Valencia, “a los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y a los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás

disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.”

2. Respecto a la página 5, primer párrafo, en lo relacionado con el memorial de la demandante para recurrir el auto de rechazo de demanda.

En torno a estos puntos señaló la memorialista debe adicionarse, aclararse y/o corregirse en la parte en que se indica: “(...) *separó las pretensiones en principales, consecuenciales y subsidiarias en contra de una de las AFPs demandadas para el caso de demostrarse la afiliación se produzcan los efectos derivados de la normatividad que obligan a las administradoras de pensiones al recaudo de los aportes, se declare la existencia del derecho prestacional de conformidad con la Ley 100 de 1993, sin modificaciones, y se emitan las órdenes y condenas a cargo de quienes tras el debate probatorio, resulten legalmente obligadas; o para el caso de no demostrarse la afiliación en una o varias AFPs se emitan las condenas respectivas a Colpensiones. Presentando como subsidiaria tal pretensión, pero con la disyuntiva “o”, en contra de cualquiera de las AFP demandadas, para que en caso de que se demuestre la afiliación a una o varias de ellas y se desestimen las pretensiones de reconocimiento de pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley 100 de 1993, se declare la existencia de la prestación como se indicó anteriormente, esta vez en virtud de la Ley 797 de 2003*”;

Lo anterior, en virtud de que realmente lo expresado por la parte demandante, en esa oportunidad, fue lo siguiente:

“(...) y formuló, de acuerdo con lo expuesto en los hechos 5 y 6 de la demanda, en primer lugar y con la disyuntiva o excluyente O, pretensiones principales, consecuenciales y subsidiarias en contra de una cualquiera de AFP demandadas, para, en el caso de que se demuestre la afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA al Sistema General de Pensiones, en una o en varias de las AFP demandadas, o en una o en varias de las AFP que existían en los años 2000 al 2002, que hoy no existen, pero cuyas obligaciones fueron asumidas por las AFP actualmente existentes y que son demandadas, se produzcan los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, se declare la existencia del derecho a la pensión de sobreviviente de las demandantes, con fundamento en la ley 100 de 1993, sin modificaciones, y se emitan las demás declaraciones, órdenes y condenas a cargo de la AFP que, luego del debate probatorio, finalmente resulte legalmente obligada (pretensiones principales 1, 2, 3, 4 y 5 y pretensiones consecuenciales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o pretensiones subsidiarias 4 y 5) o para, en el caso de que no se demuestre la afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA al Sistema General de Pensiones, en una o en varias de las AFP demandadas, o en una o en varias de las AFP que existían en los años 2000 al 2002, que hoy no existen, pero cuyas obligaciones fueron asumidas por las AFP actualmente existentes y que son demandadas, se declare la existencia del derecho a

la pensión de sobreviviente de las demandantes, con fundamento en la ley 100 de 1993, sin modificaciones, y se emitan las demás declaraciones, órdenes y condenas a cargo de la AFP pública, en este caso, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES produciendo los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y en cumplimiento de los compromisos del Estado Colombiano establecidos en los mencionados instrumentos y disposiciones normativas y jurisprudenciales (pretensiones principales 1, 2, 3, 4 y 5 y pretensiones consecuenciales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o pretensiones subsidiarias 4 y 5). Lo anterior, recordando y reiterando que en el idioma castellano, la “o”, en la mayoría de los casos, tiene una función disyuntiva, excluyente, para significar o hacer explícito uno o una, la posibilidad de elegir una de las opciones que se relacionan, que se usa la “o” colocándola antes de enunciar cada una de las alternativas, para que tenga valor excluyente y que en las pretensiones aludidas se usó la disyuntiva o excluyente O, con el fin de nombrar, confirmar y vincular con las declaraciones, órdenes y condenas a la AFP demandada que resulte obligada y de excluir a las demás AFP demandadas.

En segundo lugar y con la disyuntiva O, pretensiones subsidiarias en contra de una cualquiera de AFP demandadas, para, en el caso de que se demuestre la afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA al Sistema General de Pensiones, en una o en varias de las AFP demandadas, o en una o en varias de las AFP que existían en los años 2000 al 2002, que hoy no existen, pero cuyas obligaciones fueron asumidas por las AFP actualmente existentes y que son demandadas y para el caso en que se desestimen las pretensiones de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley 100 de 1993, sin modificaciones, se produzcan los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, se declare la existencia del derecho a la pensión de sobreviviente de las demandantes, con fundamento en la ley 797 de 2003, y se emitan las demás declaraciones, órdenes y condenas a cargo de la AFP que, luego del debate probatorio, finalmente resulte legalmente obligada (pretensiones subsidiarias 1, 2 y 3, pretensiones principales 4 y 5 y pretensiones consecuenciales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o pretensiones subsidiarias 4 y 5) o para, en el caso de que no se demuestre la afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA al Sistema General de Pensiones, en una o en varias de las AFP demandadas, o en una o en varias de las AFP que existían en los años 2000 al 2002, que hoy no existen, pero cuyas obligaciones fueron asumidas por las AFP actualmente existentes y que son demandadas y para el caso en que se desestimen las pretensiones de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley 100 de 1993, sin modificaciones, se declare la existencia del derecho a la pensión de sobreviviente de las demandantes, con fundamento en la ley 797 de 2003, y se emitan las demás declaraciones, órdenes y condenas a cargo de la AFP pública, en este caso, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES produciendo

los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y en cumplimiento de los compromisos del Estado Colombiano establecidos en los mencionados instrumentos y disposiciones normativas y jurisprudenciales (pretensiones subsidiarias 1, 2 y 3, pretensiones principales 4 y 5 y pretensiones consecuenciales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o pretensiones subsidiarias 4 y 5). Lo anterior, recordando y reiterando que en el idioma castellano, la “o”, en la mayoría de los casos, tiene una función disyuntiva, excluyente, para significar o hacer explícito uno o una, la posibilidad de elegir una de las opciones que se relacionan, que se usa la “o” colocándola antes de enunciar cada una de las alternativas, para que tenga valor excluyente y que en las pretensiones aludidas se usó la disyuntiva o excluyente O, con el fin de nombrar, confirmar y vincular con la declaraciones, órdenes y condenas a la AFP demandada que resulte obligada y de excluir a las demás AFP demandadas.”

Sustentando la mandataria judicial que lo anterior es relevante, por la complejidad del caso, siendo necesario aludir expresamente a “los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y a los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.”

3. Respecto a la página 6, sexto párrafo. En cuanto se abstuvo la sala de pronunciarse respecto a la solicitud de la actora en torno a oficiar a la EPS SURA y a las demandadas para que aporten los documentos que obren en su poder.

Lo anterior bajo los argumentos de que, “los datos de ubicación del Sr. DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258, le fueron negados a la parte demandante por la EPS SURA con el argumento de la protección de datos sensibles y, en sede de tutela, amparada su respuesta y considerada como satisfactoria frente a los presupuestos de las respuestas que satisfacen el derecho de petición; por lo que, la única opción que resta, es que los datos de ubicación de esta persona sean requeridos por la autoridad que conoce del proceso, de lo contrario, los derechos de la parte demandante, especialmente el de acceder a la justicia, solo lo serian en apariencia, porque como se ha indicado, las razones por las cuales se vincula como demandado en este proceso a DIEGO DE JESUS URIBE VELASQUEZ identificado con C.C. # 70.547.258 es que él pruebe el cumplimiento de la obligación de afiliación de JOHN JAIRO OCAMPO VALENCIA identificado con C.C. #88.251.486 al Sistema General de Pensiones en una o varias de las AFP indicadas en los hechos 5 y 6 de la demanda y se produzcan los efectos del art 13 Decreto 692 de 1994, hoy art 2.2.2.1.2. del Decreto 1833 de 2016, de las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que obligan a las AFP a realizar el recaudo de los aportes y hacen inoponibles a los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social Integral el no pago de

los aportes y/o la mora en el pago de los mismos y que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y los efectos solicitados en las pretensiones principales 1, 2 y 3 y ss o subsidiarias 1, 2 y 3 y ss de la demanda y que, en caso de que no pruebe el cumplimiento de la obligación de afiliación, se declare la existencia del derecho a la pensión de sobreviviente de las demandantes y se emitan las demás declaraciones, órdenes y condenas a cargo de la AFP pública, en este caso, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES produciendo los efectos previstos en instrumentos normativos internacionales y nacionales que institucionalizan el derecho a la seguridad social integral, en las demás disposiciones normativas y jurisprudenciales que hacen alusión a la causa y momento de causación del aporte al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL o subsidiariamente, se proceda al reconocimiento de la prestación económica a cargo de AMALIA MATILDE TORO DE ACOSTA o sus herederos determinados o indeterminados y de DIEGO DE JESÚS URIBE VELASQUEZ de forma solidaria o a cargo de la señora TORO DE ACOSTA o sus herederos determinados o indeterminados “y/o” del señor URIBE VELÁSQUEZ, esto es, de forma conjunta o individual.

Es por ello que el momento de emitir el auto admisorio de la demanda, es el momento oportuno para, además de las ordenes que corrientemente se emiten, proferir la de oficiar a la EPS SURA para que informe los datos de ubicación del último empleador del causante para, de esta forma, proceder a la notificación del mismo a este demandado y al traslado de la demanda, porque como se ha indicado y se deduce, ante las omisiones de las AFPs demandadas en las investigaciones que realizan en virtud de las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones económicas que ante ellas se depreca y en sus respuestas, son los empleadores del causante los llamados a clarificar la situación y de paso, los derechos y las obligaciones, de lo contrario, la demanda, el proceso, los presuntos derechos y las presuntas obligaciones honrarían la formalidad, pero no la sustancialidad como lo ordena el art 228 de la Constitución Política, además, porque contrario a lo manifestado, dadas las circunstancias del caso, el momento procesal oportuno de emitir la orden de oficiar a la EPS SURA para obtener los datos de ubicación del demandado mencionado, es al momento de proferir el auto admisorio de la demanda para poder proceder, en primer lugar, con la notificación personal como lo ordena la Ley y porque la solicitud de que se emita y comuniqué la orden de oficiar a la EPS SURA para obtener los datos de ubicación del demandado mencionado es, precisamente, para eso, para poder notificarlo. En relación con la solicitud de que se ordene a los demandados que aporten, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por la parte demandante, con respeto se indica que la misma, además de ser necesaria por la complejidad del asunto, es procedente por estar expresamente consagrada en el num 2 del párrafo del art 31 del C.P.T y de la S.S. y porque no existe prohibición alguna para que dicha orden sea expresa en el auto admisorio de la demanda.”

4. Respecto a la página 8, quinto párrafo

Solicita se aclare, corrija y/o adicione el referido punto del auto de decisión de segunda instancia, en cuanto se expresó: “no desconoce la Sala que la demanda interpuesta,

presenta varias inconsistencias técnicas en su elaboración, que incluso, requirieron de adecuación e interpretación y pese a no ser la redacción más afortunada (...).

Lo anterior, porque *“la demanda no se adecuó, simplemente se explicó, porque todo, absolutamente todo, en el área del derecho, requiere interpretación y porque es necesario conocer las inconsistencias técnicas y las falencias en la redacción para proceder a subsanarlas porque en este caso y en todos, lo que debe prevalecer y realizarse sin obstáculos, que incluso pueden provenir del apoderado, es el derecho sustancial de las demandantes”.*

ii) Consideraciones del Tribunal

Para decidir lo pretendido por la apoderada de la parte demandante, quien acudió de manera indistinta a la adición aclaración o corrección del auto de decisión emitido en esta instancia, siendo figuras procesales disímiles, se acudirá a los artículos 285, 286 y 287 que consagran dichas figuras respectivamente así:

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. *La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.*

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. *Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.*

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.”

“ARTÍCULO 287. ADICIÓN. *Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la

demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

Referido lo anterior, se tiene en torno a **los puntos 1, 2 y 4**, en que se solicita indicar expresamente lo señalado por la apoderada de la parte demandante bien en el acápite de hechos o en el memorial de alzada, ha de advertirse que, ello no resulta oportuno, toda vez que la providencia emitida en esta sede contiene una síntesis del trámite procesal desplegado en primera instancia, en lo relacionado al recurso de alzada, ello no implica que esta Corporación deba transcribir literalmente lo referenciado por la parte; ni los aspectos que pide introducir en el **auto de decisión de segunda instancia**, referidos en el escrito de demanda, o al subsanar los requisitos exigidos por la juez de instancia o en el recurso de apelación, tampoco son motivo de adición, aclaración o corrección del referido proveído, puesto que lo consignado en él no implica la modificación o reemplazo del escrito de demanda, ni del escrito de subsanación dirigido por la activa, pues en virtud de las facultades de interpretación con que cuenta el juez, y atendiendo a la primacía de la realidad sobre las formas, lo que se hizo fue revocar el rechazo de la demanda, disponiendo que la Juez A Quo debía proferir auto admisorio y continuar con el trámite del proceso.

Ahora, respecto del **punto 3°**, sobre la solicitud de oficiar a la EPS SURA y a las demandadas para que aporten los documentos que obren en su poder sobre los datos de ubicación del señor Diego Uribe Velásquez, se indica que no hay lugar a aclarar, adicionar o corregir la decisión en sentido alguno, toda vez que el objeto del recurso era analizar si fue acertada o no la decisión de la Juez de instancia de rechazar la demanda, por lo que al revocarla y para en su lugar disponer que la a Quo la admita, es dicha funcionaria quién deberá pronunciarse en torno a dicha solicitud.

Así, la Sala estima carente de vocación de prosperidad lo pedido, pues a la luz lo argumentado no se observa que se hubiera omitido resolver de fondo sobre cualquier aspecto del recurso respecto del cual debiera pronunciarse la Sala, ni yerro en la parte motiva que influya en la decisión, máxime cuando la solicitud de revocatoria de la decisión de instancia incoada por la activa, en la alzada salió avante al disponerse en esta sede que se profiera auto admisorio, tal y como lo pretendió.

Así las cosas, al no cumplirse los requisitos previstos por los artículos 285, 286, 287 del CGP, será denegada la solicitud elevada por la apoderada de la parte demandante.

iii. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

NEGAR la solicitud de adición, aclaración y/o corrección del auto de decisión de naturaleza y fecha conocidos, proferido por esta Sala de Decisión Laboral dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia.

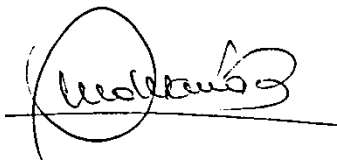
Se ordena notificar por estados.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
(En ausencia justificada)

<p>Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N° 228 fijados hoy 19 de diciembre de 2022 a las 8:00AM</p> <p>_____</p> <p>El secretario</p>
--